



Consejo Consultivo de Canarias

DICTAMEN 472/2010

(Sección 1ª)

La Laguna, a 7 de julio de 2010.

Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Presidente del Cabildo Insular de La Gomera en relación con la *Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por la reclamación de indemnización formulada por E.G.O.D., por daños ocasionados en el vehículo de su propiedad, como consecuencia del funcionamiento del servicio público de carreteras (EXP. 420/2010 ID)**.

FUNDAMENTOS

I

1. Se dictamina la Propuesta de Resolución de un procedimiento de responsabilidad patrimonial tramitado por el Cabildo Insular de La Gomera, ante la reclamación presentada por daños que se imputan al funcionamiento del servicio público de carreteras de su competencia administrativa.

2. Es preceptiva la solicitud de Dictamen, en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1.D.e) de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias. La solicitud ha sido remitida por el Presidente del Cabildo Insular de La Gomera, de conformidad con el art. 12.3 de la misma Ley.

3. En su escrito de reclamación la afectada alega que el día 9 de enero de 2006, circulaba con su vehículo por la carretera TF-713 en dirección a Las Hayas, cuando a la altura del punto kilométrico 15+000 colisionó con varias piedras que en ese momento se desprendieron de uno de los taludes contiguos a la calzada, las cuales no pudo esquivar, provocándole varios desperfectos en su vehículo, cuyo valor asciende a 1.054,07 euros, reclamando la correspondiente indemnización.

* **PONENTE:** Sr. Díaz Martínez.

4. En este supuesto son de aplicación aparte de la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias, de 8 de mayo, y su Reglamento, que se aprueba por el Decreto 131/1995, de 11 de mayo, tanto la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP-PAC), como el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial aprobado por el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, siendo una materia cuya regulación no ha sido desarrollada por la Comunidad Autónoma de Canarias, aun teniendo competencia estatutaria para ello. Asimismo, es de aplicación la legislación de régimen local, específicamente el art. 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y las normas reguladoras del servicio público de referencia.

II

1. El procedimiento se inició mediante la presentación del escrito de reclamación, realizada el 30 de marzo de 2006.

En lo que respecta a la tramitación, la misma se desarrolló de forma adecuada, pues se realizaron la totalidad de los trámites exigidos por la normativa aplicable a la materia.

El 3 de mayo de 2010 se emitió la Propuesta de Resolución, habiendo vencido el procedimiento bastante tiempo atrás.

2. Por otra parte, en cuanto a la concurrencia de los requisitos constitucional y legalmente establecidos para hacer efectivo el derecho indemnizatorio, regulados en el art. 106.2 de la Constitución y desarrollados en los arts. 139 y ss. LRJAP-PAC, se observa lo siguiente:

La afectada es titular de un interés legítimo, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 139.1 LRJAP-PAC, puesto que alega haber sufrido daños en su vehículo, que se entienden derivados del funcionamiento del servicio público. Por lo tanto, tiene legitimación activa para presentar la reclamación e iniciar este procedimiento en virtud de lo dispuesto en el art. 142.1 LRJAP-PAC. La representación con la que se actúa ha quedado acreditada (art. 32 LRJAP-PAC).

La competencia para tramitar y resolver el procedimiento incoado corresponde al Cabildo Insular de La Gomera, como Administración responsable de la gestión del servicio público en cuya prestación, presuntamente, se produjo el daño por el que se reclama.

En cuanto al plazo para reclamar, concurre este requisito, ya que la reclamación se presenta dentro del plazo de un año posterior a los hechos, tal y como exige el art. 142.5 LRJAP-PAC.

El daño por el que se reclama es efectivo, evaluable económicamente y está individualizado en la persona de la interesada, de acuerdo con lo prescrito en el art. 139.2 LRJAP-PAC.

III

1. La Propuesta de Resolución estima la reclamación presentada, considerando el órgano instructor que, en base a lo actuado durante la tramitación, ha resultado acreditada la relación de causalidad entre el actuar de la Administración y el daño causado a la interesada.

2. En este caso, el hecho lesivo ha resultado demostrado mediante lo manifestado por la testigo presencial del accidente, que circulaba en un vehículo que seguía al de la interesada, con la que únicamente guarda una relación profesional.

Además, su testimonio se confirma por lo señalado por el Servicio, ya que, aunque no tuvo constancia del accidente, recoge en su informe que "existe un talud importante con corte de terreno en vertical en ambos márgenes". Este informe no contradice la producción del accidente. Asimismo, el tipo de desperfectos padecidos, cuya efectiva producción resulta justificada de la documentación obrante en el expediente, son los propios de un siniestro como el referido por la interesada y la testigo.

3. En lo que se refiere al funcionamiento del servicio público, éste ha sido deficiente, puesto que no se ha realizado el correcto control y saneamiento de los taludes contiguos a la calzada, ni éstos cuentan con unas adecuadas medidas de seguridad, como el propio accidente demuestra.

Por lo tanto, ha resultado probada la concurrencia de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño reclamado por la interesada.

4. La Propuesta de Resolución, que estima la reclamación efectuada, es conforme a Derecho por las razones expresadas en los puntos anteriores.

A la interesada le corresponde la indemnización propuesta conceder, que coincide con la solicitada, ascendente a 1.054,07 euros, importe que se ha justificado debidamente. Esta indemnización referida al momento en el que se

produjo el daño, ha de actualizarse al resolver el procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 141.3 LRJAP-PAC, como correctamente afirma el Instructor.

Sin embargo, y tal y como se ha señalado a ese Cabildo Insular en otros supuestos, él ha de abonar a la interesada, en su totalidad, la cuantía correspondiente, no siendo procedente que pague parte de la indemnización su Compañía aseguradora, pues es al Cabildo a quien le corresponde, exclusivamente, indemnizar a la misma, ya que, como titular del servicio público causante del daño reclamado, es el responsable patrimonial del hecho lesivo, no procediendo que la Compañía aseguradora abone parte de la indemnización, al ser una entidad privada sin legitimación para ser parte en este procedimiento, sin perjuicio de las relaciones contractuales existentes entre ambas entidades.

C O N C L U S I Ó N

La Propuesta de Resolución, que estima la reclamación, es conforme a Derecho, al apreciarse la existencia de nexo causal entre el funcionamiento del servicio público y el daño ocasionado, debiendo indemnizar el Cabildo de La Gomera a la interesada, de conformidad con lo expuesto en el Fundamento III.4.